

REPUBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA
SALA DE DECISIÓN NO. 4

PROCESO No. 76001-33-33-018-2015-00279-01
DEMANDANTE INDIRA YUSSED GUEVARA MENA Y OTROS (maría-elvira-2@hotmail.com)
DEMANDADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, SALUCOOP EPS
(snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co; notificacionesjudiciales@saludcoop.coop)
MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA
AUTO
ASUNTO FUERO DE ATRACCION

Santiago de Cali, Treinta (30) de octubre de Dos Mil Veinte (2020)

MAGISTRADA PONENTE: DOCTORA LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Procede esta Corporación en Sala Jurisdiccional de Decisión No. 4 a resolver sobre el Recurso de **APELACIÓN** que fuera interpuesto oportunamente por el representante judicial de la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, contra el **auto interlocutorio No. 346 del 20 de mayo de 2019**, proferido dentro de la audiencia inicial por el **JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**, mediante la cual **NO SE DECLARÓ PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**, dentro del proceso adelantado por medio de apoderado por los señores **INDIRA YUSSED GUEVARA MENA Y OTROS** en ejercicio del medio de control de **REPARACION DIRECTA**, consagrada en el artículo 140 del CPACA.

ANTECEDENTES PROCESALES

Se solicita en la demanda reseñada que mediante sentencia de mérito esta jurisdicción se pronuncie sobre las siguientes,

P R E T E N S I O N E S:

PRIMERA: Que se declare que la NACIÓN-SUPERINTENDENCIA DE SALUD y SALUDCOOP EPS son administrativamente responsables de los perjuicios morales y materiales causados a los actores con motivo de la falla o falta de servicio médico o de la administración que condujo a la muerte de la señora ANUNCIACIÓN MENA DE GUEVARA, quien falleció el día 11 de octubre de 2012.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la Nación - Superintendencia de Salud y Saludcoop EPS como reparación del daño causado, a pagar a los actores los perjuicios morales y materiales en la cuantía que tasan en la demanda.

TERCERA: Que se condene al pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la Sentencia como lo determina la Sentencia C-188 de 1999 de la Corte Constitucional.

CUARTA: Que se condene en costas a las partes demandadas.

De la demanda, se destacan como HECHOS constitutivos, entre otros, los siguientes:

1. Que la señora ASUNCIÓN MENA DE GUEVARA desde el año de 1993 como empleada activa del magisterio de Santiago de Cali, y estando afiliada al servicio de salud prestado por COSMITET, empezó a presentar hinchazón, debiendo ser tratada con exámenes de laboratorio estudiando la orina sin obtener ningún resultado, pero al verla cada vez peor fue llevada a la Clínica Valle del Lili donde descubren que tiene problemas renales, pues tenía comprometido medio riñón.
2. Que, debido a los altos costos del tratamiento, se decide llevarla a la EPS COSMITET, pero con el cambio del medicamento se queda sin riñón, iniciando el proceso de diálisis 3 días por semana, y un día cualquiera aparece fuera del sistema y la empieza a tratar SALUD COLOMBIA entidad que presta el servicio por ser pensionada, y está en ese largo proceso por más de 8 años.
3. Que como la fístula por medio de la cual le realizaban diálisis estaba deteriorada, se la hacían por el cuello, lo que era de manera provisional, mientras le adecuaban la fístula con un injerto, pero la vena del cuello empezó a presentar dificultades y el neurólogo sugirió iniciar diálisis peritoneal que debía realizarse en casa. No obstante, este sistema también falló, y pese a definir la instalación de un catéter lumbar, empezaron las demoras y la salud de la señora MENA se fue deteriorando más y más hasta ser remitida a la Clínica REY DAVID, sin embargo, cuando la recibieron no había nada que hacer, porque el organismo ya se había contaminado y le dio muerte cerebral en la misma mañana que fue recibida.
4. Que en criterio de los actores la SUPERINTENDENCIA DE SALUD no cumplió con su función de supervisar la calidad de la atención de la salud, en SALUDCOOP EPS, mediante la inspección, vigilancia y control en la calidad de los servicios por parte de ésta para con la señora MENA DE GUEVARA.

LA DECISIÓN RECURRIDA

Dentro de la audiencia inicial celebrada en este proceso con fecha 20 de mayo de 2020

2019, el Juez Dieciocho Oral Administrativo del Circuito de Cali, mediante Auto Interlocutorio No. 346 declaró NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS LEGALES, declaró NO PROBADA la excepción presentada por la SUPERINTENDENCIA DE SALUD de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, se declaró probada de oficio la excepción de FALTA DE JURISDICCIÓN y se dio por terminado el proceso, ordenando su remisión al Juez Civil del Circuito Judicial de Santiago de Cali.

Fundamenta su decisión el A Quo en las siguientes consideraciones:

- Que SALUDCOOP EPS es una entidad de derecho privado adscrita al sistema de seguridad social integral, y presta servicios de salud.
- Que de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2462 de 2013, la Superintendencia de Salud encargada del sistema de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud, es una entidad de carácter técnico adscrita al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Que dentro de las funciones asignadas se encuentran las de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud, entre otras, lo que permite concluir que la SUPERINTENDENCIA es una entidad encargada de vigilar el sector salud, razón por la cual está llamada a responder por todas aquellas acciones desplegadas en cumplimiento de sus funciones.
- Que de acuerdo con los fundamentos fácticos planteados en la demanda se tiene que, si bien en las pretensiones se hace referencia a la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, lo cierto es que las mismas están enfocadas a cuestionar la atención médica brindada por SALUDCOOP EPS a la señora ASUNCIACION MENA DE GUEVARA, de la cual se infiere es a la que corresponde asumir la defensa como entidad demandada.
- Que conforme con lo expuesto, no existe pieza procesal alguna que de cuenta de la participación de una entidad de carácter público, en este caso frente a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, no se observa que haya tenido intervención alguna en el objeto del presente asunto, por lo que no es aplicable el llamado fuero de atracción, toda vez que la jurisdicción ordinaria es la competente, dado que la naturaleza de la entidad donde recibió la atención médica por la cual en aquellos casos en que un ente privado causa daños a los pacientes, debe responder por sus actos con su propio patrimonio y no las entidades estatales encargadas de trazar políticas en materia de salud y de vigilar su ejecución.
- Que para que esta jurisdicción pueda conocer de procesos donde haga parte una entidad de carácter privado y una entidad estatal, a través de la figura de fuero de atracción, es requisito que exista una razón legal y fáctica que justifique la pretensión

contra todos los citados al proceso, la cual no se presenta en el presente asunto, al no advertirse injerencia alguna de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en el presunto daño causado al extremo activo.

RECURSO DE APELACIÓN

POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Esta parte, presenta dentro de la audiencia inicial recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio No. 346 del 20 de mayo de 2019, solicitando su revocatoria en cuanto a la decisión de declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, pues tal como lo adujo el Juzgado en la audiencia, no existe ninguna razón legal y fáctica que permita configurar la existencia de un fuero de atracción entre ella y SALUDCOOP, por tanto, no parece lógico que se declare probada la excepción de falta de jurisdicción y se deje vinculada a la entidad.

TRAMITE DEL RECURSO

Mediante Auto No. 450 de fecha 20 de mayo de 2019, fue concedido en el efecto suspensivo el recurso interpuesto.

ANALISIS DE FONDO

1.- COMPETENCIA

Este Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia emitida en este proceso en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

2.- CONFLICTO JURÍDICO

En esta instancia la controversia se contrae a definir si tal como lo decidió el A Quo no es factible declarar probada la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, pese a que como lo alega la recurrente, se declaró probada la excepción de falta de jurisdicción para lo cual se precisó que no existía ninguna razón legal ni fáctica sobre la cual se pudiera construir un fuero de atracción entre dicha entidad y SALUDCOOP EPS, la entidad privada que prestó los servicios de salud a la señora ASUNCIÓN MENA DE GUEVARA.

3.- EL FUERO DE ATRACCION

Ha sostenido el Consejo de Estado¹ que el fuero de atracción resulta procedente siempre que, desde la formulación de las pretensiones y su soporte probatorio, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la *litis* resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas.

Además, que tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo a adquirir y mantener la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones deprecadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción, incluso en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la *litis* determina que es la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la llamada a conocer del pleito.

Así pues, cuando se formula una demanda, de manera concurrente, contra una entidad estatal y contra un sujeto de derecho privado, por un asunto que en principio debería ser decidido ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, que adquiere competencia para definir la responsabilidad de todos los demandados. Por tanto, esta jurisdicción tiene competencia para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado en virtud del fuero de atracción, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo.

Igualmente, que, el factor de conexión que da lugar a la aplicación del fuero de atracción y que permite la vinculación de personas privadas que, en principio, están sometidas al juzgamiento de la jurisdicción ordinaria, debe tener un fundamento serio, es decir, que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que, razonablemente, conduzcan a pensar que su responsabilidad pueda quedar comprometida.

En reciente providencia² se sostuvo que esta jurisdicción tiene competencia para vincular y juzgar a los sujetos de derecho privado cuando se les demande de manera conjunta con una entidad pública, en virtud del fuero de atracción y siempre que se trate de acciones u

¹ CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN. Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 13001-23-31-000-2005-02042-01(45978). Actor: LELIS MERCEDES SALAS CORREA Y OTROS. Demandado: CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL Y OTRO

² CONSEJO ES ESTADO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veinte (2020). Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00966-01(52337) A. Actor: JUAN PABLO ARIZA MARÍN Y OTROS. Demandado: SENA Y OTRO

omisiones que, razonablemente, permitan inferir que la responsabilidad del particular puede estar comprometida, supuesto que debe analizarse al admitir la demanda.

Que el fuero de atracción impone que los hechos en los que se sustenten las imputaciones formuladas en contra de la entidad y el particular sean los mismos, pues se parte de la existencia bien sea de un litisconsorcio necesario por pasiva o de una con-causalidad, en virtud de la cual los dos sujetos eventualmente contribuyeron con su conducta a generar el daño y, por ende, son solidariamente responsables de los perjuicios causados.

El juez debe hacer un análisis que permita considerar razonable que la actuación del demandado sí fue concausa eficiente del daño, lo que permite evitar que la determinación de la jurisdicción quede al capricho de la parte actora, que sea alterada de manera temeraria y que, en efecto, atienda a la realidad de las circunstancias que dieron origen a la controversia.

Lo anterior no implica prejuzgamiento, pues solo constituye un estudio preliminar cuya finalidad es determinar si las condiciones del caso ameritan o no que sea analizado en su integridad por los jueces o tribunales administrativos, así como por el Consejo de Estado, según el caso.

De otro lado, el fuero de atracción implica la modificación de la jurisdicción, pero no el régimen jurídico al amparo del cual se deben resolver las pretensiones formuladas en contra de los particulares, toda vez que, al margen de que el proceso lo conozca el juez de lo contencioso administrativo, no les resultan aplicables las reglas de la responsabilidad estatal, sino las del derecho privado, tal como los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia.

En suma, en virtud de la garantía del juez natural, del derecho a que un asunto sea definido conforme a la normativa previamente definida y del carácter de orden público de las normas que rigen la jurisdicción, la aplicación del fuero de atracción debe ser excepcional, porque la modificación de las autoridades legalmente facultadas para conocer de una controversia no pueden quedar al arbitrio de las partes, máxime cuando cada una de las jurisdicciones que se encuentran establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, verbigracia la ordinaria o de lo contencioso administrativo, tienen acciones y procesos propios que atienden a la naturaleza sustancial de los asuntos que han sido puestos bajo su consideración.

4.- SOBRE LA LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA

Ha sostenido el Consejo de Estado³ que la legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, de suerte que, quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

5.- CASO CONCRETO

Debe anotarse inicialmente que la entidad demandada SUPERINTENDENCIA DE SALUD, en su escrito de contestación de demanda, aparte de oponerse a la prosperidad de las pretensiones, formuló las siguientes excepciones: HECHO DE UN TERCERO, FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA, CAUSA EFICIENTE, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, DEL CONTRATO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Y LA ASUNCIÓN DEL RIESGO MEDICO POR PARTE DEL ASEGURADOR.

No obstante, en esta instancia, sólo se hará referencia a la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, porque la decisión que se tomó en primera instancia, fue objeto del recurso de apelación.

Dicha excepción se sustentó con fundamento en los siguientes argumentos:

- ✓ Que es evidente la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la SUPERINTENDENCIA, toda vez que las pretensiones tienen como sustento la presunta falla en la prestación del servicio de salud a la señora ASUNCIACIÓN MENA DE GUEVARA, órbita ajena a dicha entidad.

³ CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2020). Radicación número: 68001-23-31-000-2008-00607-01(54864). Actor: EUNILCE MARÍN SAAVEDRA. Demandado: NACIÓN- RAMA JUDICIAL Y OTROS.

- ✓ Que la SUPERINTENDENCIA es un organismo de carácter técnico administrativo, adscrito al MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, y en su condición de tal debe propugnar porque los integrantes del sistema general de seguridad social en salud, cumplan a cabalidad con las obligaciones y deberes asignados a ellos, en la ley y demás normas reglamentarias, para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados. Por tanto, las funciones de inspección, vigilancia y control atribuidas a la entidad se circunscriben dentro del marco legal que reglamenta el sistema general de seguridad social en salud.
- ✓ Que no corresponde a la SUPERINTENDENCIA las funciones de aseguramiento y de prestación del servicio médico, atención de urgencias, ni mucho menos atender terapias, de manera que no se puede imputar la causación del presunto daño a la misma, por cuanto no logra advertirse ningún vínculo entre las funciones descritas y las desarrolladas por ella.
- ✓ Que el hecho generador del presunto daño que se le causó a la parte actora, proviene de una función desarrollada inicialmente por la prestación de los servicios de salud y el aseguramiento por parte de SALUDCOOP EPS, en nada tuvo que ver la SUPERINTENDENCIA, por lo cual considera que no le asiste legitimación en la causa por pasiva.
- ✓ Que no se ha acreditado que el ente de control haya incurrido en una omisión de su función, por el contrario, las entidades demandadas iniciaron los trámites correctivos correspondientes, advirtiendo que, el daño alegado no deviene de una omisión de vigilancia y control sobre la entidad prestadora del servicio de salud, sino de un acto paramédico, no imputable a la SUPERINTENDENCIA.

En la providencia recurrida, se decidió declarar probada la excepción de FALTA DE JURISDICCIÓN y se dispuso remitir el expediente a la justicia ordinaria, bajo la consideración de que no existía un fuero de atracción entre la SUPERINTENDENCIA DE SALUD y SALUDCOOP EPS, aduciendo respecto de la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por la primera de las citadas, que en ese momento procesal no podía definirse sobre ese aspecto.

La Sala en esta instancia revocará la decisión adoptada respecto de la excepción propuesta por la SUPERINTENDENCIA, por las razones que se exponen a continuación.

Efectivamente, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado la definición sobre la existencia del fuero de atracción entre una entidad pública y una privada señaladas como demandadas por la parte actora, debe darse al inicio del proceso, es decir con la admisión de la demanda.

En el presente caso, se observa a folio 77 y vuelto del cuaderno principal, que el A Quo mediante auto de sustanciación No. 918 de fecha 12 de agosto de 2015, indicó a la parte actora sobre las falencias presentadas en su demanda, entre ellas, se advirtió lo siguiente: *"Debe la parte actora indicar los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones formuladas contra la Superintendencia de Salud (art. 162, num, 3º CAPACA), toda vez que sólo se hizo alusión a las súplicas enarboladas frente a Saludcoop"*.

En atención a dicho requerimiento la parte actora presentó un escrito visible a folio 78 del cuaderno principal, en el cual se indicó la siguiente razón para la vinculación de SALUDCOOP EPS: *"La Superintendencia de Salud no cumplió con su función de supervisar la calidad de la atención de la salud, en SALUDCOOP EPS mediante la inspección, vigilancia y control en la, calidad de la prestación de los servicios por parte de la EPS para con la señora ANUNCIACION GUEVARA DE MENA dado que no se le brindó la atención requerida en salud, no se presentaron las condiciones de disponibilidad, y calidad en el tratamiento de la diálisis que se tenía que proporcionar a la madre y abuela de mis mandantes; es por eso que solicito se condene a dicha entidad"*.

Teniendo en cuenta la anterior aclaración, y encontrándola ajustada a derecho, el Juez de primera instancia profirió el Auto No. 835 de fecha 15 de septiembre de 2015, mediante el cual, procedió a ADMITIR la demanda contra la SUPERINTENDENCIA DE SALUD y SALUDCOOP EPS.

Lo anterior indica que, el A Quo en ese momento procesal, definió positivamente sobre la existencia del FUERO DE ATRACCION entre la SUPERINTENDENCIA DE SALUD y SALUDCOOP EPS; no obstante, en la audiencia inicial, se hizo referencia nuevamente sobre el aludido fuero, manifestando que el mismo no existía tomando en consideración las funciones que legalmente le corresponden a la mencionada SUPERINTENDENCIA, las que en su criterio, no tienen relación alguna con los hechos a los que se hace referencia en la demanda.

Al analizar los argumentos expuestos por el A Quo para fundamentar su decisión de declarar probada la excepción de FALTA DE JURISDICCIÓN, encuentra la Sala en esta instancia que, todos ellos, hacen referencia a la definición sobre la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA de la entidad recurrente, pues contrario a lo sostenido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, procedió a estudiar de fondo sobre la legitimación material en la causa por pasiva de la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, análisis que corresponde al fallo en profundidad y no a la audiencia inicial.

Lo que se aprecia entonces es que la decisión de declarar probada la excepción de FALTA

DE JURISDICCIÓN por la supuesta falta de fuero de atracción entre las dos entidades demandadas, cuando ya había sido definido este aspecto antes de la admisión de la demanda, para lo cual, se repite, se utilizaron argumentos propios del estudio de la legitimación en la causa por pasiva, es de toda suerte improcedente, no sólo por ser violatorio de la ley procesal, sino además de los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica de las partes del proceso.

Ello es así, pues con la admisión de la demanda el juez de conocimiento, ya había aceptado la existencia del vínculo entre las entidades pública y privada demandadas, y sorpresivamente en la audiencia inicial se decide cambiar las reglas del proceso ya definidas sin que para el efecto se hubiera observado la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.

Por lo expuesto, se revocará la decisión mediante la cual se declaró probada la excepción de FALTA DE JURISDICCIÓN y se confirmará la decisión de no declarar probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, ya que al ser corregida la demanda en respuesta al requerimiento formulado por el A Quo en el citado Auto No. 918 de fecha 12 de agosto de 2015, se le imputó responsabilidad a la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, lo que configura la existencia de LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO, y ciertamente sobre la LEGITIMACION MATERIAL, sólo podrá haber pronunciamiento en el fallo en profundidad.

En consecuencia, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en Sala Jurisdiccional de Decisión número cuatro (4), administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. – REVOCAR el Auto No. 346 del 20 de mayo de 2019, proferido por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Cali, en cuanto declaro PROBADA DE MANERA OFICIOSA LA EXCEPCION DE FALTA DE JURISDICCIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

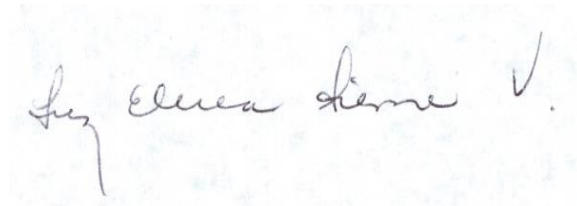
SEGUNDO. – CONFIRMAR el Auto No. 346 del 20 de mayo de 2019, proferido por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Cali, en cuanto declaro NO PROBADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, propuesta por la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO. - Una vez en firme este proveído, procédase por secretaría a devolver el expediente al Juzgado de Origen, para la continuación del trámite del presente proceso.

Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase.

Discutido y aprobado en Sala Jurisdiccional de Decisión número Cuatro (4) efectuada a la fecha.

La Magistrada,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Luz Elena Sierra Valencia", followed by a checkmark. The signature is written on a light blue grid background.

LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Proceso 2015-00279-01
Auto